

La industria electrointensiva, electrocutada

Pedimos las mismas medidas que disfrutaran nuestros competidores alemanes y franceses o se hará realidad ese riesgo de que nuestra producción cruce los Pirineos y Gibraltar

ANÁLISIS
FERNANDO
SOTO

Director general
de Aege



Los altos precios eléctricos en España continúan poniendo en jaque la supervivencia de su industria electrointensiva. El precio eléctrico final abonado en 2021 por estas empresas alcanzó los 120 euros/MWh, que supone más del doble de lo que pagó la industria francesa —50 euros/MWh—, y más de 36 euros/MWh que sus competidores alemanes.

Entramos en 2022 con unos futuros eléctricos que indican

un precio de más de 200 euros/MWh, un 80% por encima del año recién cerrado, toda una declaración del tsunami exterminador para el futuro de esta industria estratégica y esencial de nuestro país, con las terribles consecuencias que la reducción de actividad y el cierre de fábricas tendría para el empleo y la economía española.

La extrema sensibilidad al precio eléctrico de estas industrias —con costes de la electricidad que llegan a alcanzar el 60% de los costes totales— está llevando a algunas empresas a parar su actividad o a reducir su producción. El actual nivel de precios está provocando que ese 60% sea ahora ya el 75%, algo totalmente inviable para la

continuidad de algunas fábricas.

Contratos bilaterales

Las fábricas asociadas en Aege no han recibido, hasta la fecha, ofertas de contratos bilaterales de las eléctricas dominantes a precios competitivos. A esta ausencia se une que el Gobierno tampoco ha convocado las subastas de energía de tecnología inframarginal (nuclear, hidráulica y renovables), que recogía el RDL 17/2021, que supuestamente iban a celebrarse antes de fin de 2021, y que podrían haber supuesto un cierto alivio en este estresante mundo del precio eléctrico que venimos padeciendo.

Además, tampoco ha visto la luz la posible solución que su-

pone otorgar la energía del Recore a precio regulado, para atender a la industria y a los consumidores domésticos acogidos al PVPC.

La industria, sin contratos a precios eléctricos competitivos y sin subastas de energía de tecnología inframarginales, carece de herramientas para sortear esta difícil situación en 2022. Los PPA podrían suponer un alivio para capear el infierno que se está viviendo, pero la mayoría de estos contratos firmados empezarán a suministrar electricidad en 2023 o en 2024, por lo que ese alivio en este año será casi insignificante o incluso nulo. Tampoco valdrá la subasta de renovable que estamos promoviendo desde Aege y que esperamos celebrar en

este primer semestre, cuyos efectos no se notarán hasta pasados muchos meses desde su celebración.

Necesitamos medidas a corto plazo que permitan que la industria electrointensiva pueda hacer frente a los costes eléctricos en este ejercicio 2022, de otra forma las consecuencias serán evidentes: reducciones de producción como las que ya se iniciaron en otoño pasado y paradas de actividades con las que han estrenado el año varias fábricas.

Es preciso que el Gobierno destine energía del Recore para la industria y que se convoquen cuanto antes subastas de tecnología inframarginal para 2023 y 2024. Y, además, urge aprobar otras medidas regulatorias que Aege viene reclamando desde hace tiempo, como la exención del 80% del peaje de transporte, el servicio sustitutivo de la interrumpibilidad y la máxima compensación del CO2 indirecto, estimada en 450 millones de euros para 2022.

El brutal incremento del coste de la factura de electricidad está obligando a retrasar las inversiones para descarbonizar las plantas. En 2021, el sobre coste del suministro eléctrico para estas compañías electrointensivas fue de más de 1.500 millones de euros en relación con lo que pagaron sus principales competidores directos europeos.

Evidenciada la falta total de ofertas competitivas de las eléctricas dominantes, las industrias electrointensivas reclaman que el Gobierno apruebe de forma urgente las medidas propuestas en el corto plazo para mejorar su competitividad. Está en juego la supervivencia de la gran industria básica, motor fundamental de la economía española, generadora de empleo estable y de calidad.

Estamos pidiendo las mismas medidas que disfrutaran nuestros competidores alemanes y franceses desde hace años que, o se consiguen pronto, o se hará realidad ese riesgo cada vez más cercano y evidente de que nuestra producción cruce los Pirineos y el estrecho de Gibraltar.



Los dos hornos altos de Arcelor en España, en la factoría de Gijón. DAMIÁN ARIENZA